

NOMENCLATURA : 1. [40]Sentencia
JUZGADO : Juzgado de Letras Los Lagos
CAUSA ROL : C-120-2018
CARATULADO : CASTILLO / PADROS.

LOS LAGOS, VEINTITRÉS DE DICIEMBRE DE DOS MIL VEINTE.

VISTOS:

A folio 1 con fecha once de abril del año dos mil dieciocho, comparece don **LUCIANO ANSELMO CASTILLO QUELUPAN**, RUT N°8.479.162-8, agricultor, domiciliado en sector Huequecura sin número, comuna de Futrono, quien deduce demanda en procedimiento especial indígena en contra de don **FRANCISCO PADROS MARRAS**, RUT N° 7.253.534-0, factor de comercio, domiciliado en calle Fray Montalva 77, departamento 904, Las Condes; de doña **NURIA PADROS MARRAS**, CI. 11.635.315-6, factor de comercio, domiciliada en calle Piedra Roja N° 1190, comuna Las Condes, Región Metropolitana, y de don **PAU PADROS MARRAS**, RUT N° 1. 8.914.477-9, factor de comercio, domiciliado en Santa Marta N° 7.775 condominio Los Nogales, casa 14, comuna Huechuraba, por sí, y además en su calidad de herederos de su padre don **ANTONIO PADROS BIGAS**, solicitando:

1.- Que se declare la nulidad absoluta de la compraventa otorgado por escritura pública de compraventa en la Notaria de Rio Bueno, de fecha 13 de junio de 1990, repertorio 449, suscrito entre don Luciano Castillo Chicao, autorizado por su cónyuge doña Orfelina Quelupan Pitripan, por el cual, venden, ceden y transfieren a don Antonio Padros Bigas, quien compra, acepta y adquiere para sí, la propiedad denominada Hijuela Numero Cuarenta y Cuatro, resultante de la Reserva Indígena encabezada por don Victoriano Pitripán, ubicada en Huequecura, comuna de Lago Ranco, hoy comuna de Futrono, de una cabida de cuarenta y seis coma cero cero hectáreas, y los siguientes deslindes especiales: NORTE, cercos, camino público y antiguo cauce del río Caunahue, separando de terreno de la sucesión José Barrientos; ORIENTE, el arenal de la desembocadura del río Caunahue en el Lago Ranco; SUR-PONIENTE y PONIENTE, cercos quebrados separando de la hijuela cuarenta y siete de Santiago Arias Soto; SUR, el Lago Ranco, y cuyo título de dominio se encontraba inscrito a nombre de don



Luciano Castillo Chicao a fojas 477, número 448, del registro de propiedad del Conservador de Bienes Raíces de Rio Bueno, correspondiente al año 1980.-

2.- Que se declara la NULIDAD ABSOLUTA de la inscripción de la compraventa de tierra indígena referida a nombre de don ANTONIO PADROS BIGAS, a fojas 170 vuelta, número 326, del registro de propiedad del Conservador de Bienes Raíces de Rio Bueno, correspondiente al año 1990, trasladada a fojas 889, número 982, del año 1992, al registro de propiedad del Conservador de Bienes Raíces de Los Lagos,

3.- Que se ordena cancelar toda escritura, inscripción o subinscripción a que haya dado origen el contrato que se anula, y en especial. A.-Cancelación de la Escritura pública de compraventa otorgada en la Trigésimo Cuarta Notaria de Santiago de don Miguel Garay Figueroa, de 30 de noviembre de 1992, por la cual don ANTONIO PADROS BIGAS, procede a transferir este inmueble inscrito por traslado a fojas 889, N° 982 de 1992 del registro de propiedad del Conservador de Bienes Raíces de Los Lagos a sus hijos don PAU PADROS MARRAS, don FRANCISCO PADROS MARRAS, y doña NURIA PADROS MARRAS, en un 30%, un 50% y un 20% respectivamente, creando la inscripción inmediatamente posterior al traslado, esto es, inscribiendo a favor de sus hijos el dominio de ésta tierra indígena a fojas 890, número 983 del año 1990 del Conservador de Bienes Raíces de Los Lagos.

B.- Cancelación de la Escritura pública de fecha 27 de noviembre de 1995, otorgada ante el Notario de Santiago don Gonzalo de la Cuadra Fabres, titular de la Trigésima Octava Notaría de Santiago, por la cual don PAU PADROS MARRAS procede a transferirle sus derechos sobre tierra indígena a don FRANCISCO PADROS MARRAS quedando inscritos estos derechos a fojas 726 Numero 798, del año 1995 del registro de propiedad del Conservador de Bienes Raíces de Los Lagos.

C.-Cancelación de la Escritura Pública de fecha 27 de noviembre de 1995, otorgada ante el Notario de Santiago don Gonzalo de la Cuadra Fabres, titular de la Trigésima Octava Notaría de Santiago, por la cual doña NURIA PADROS MARRAS, procede a transferirle sus derechos sobre tierra indígena a don FRANCISCO PADROS



MARRAS, quedando inscritos estos derechos a fojas 727 Numero 799, del año 1995 del registro de propiedad del Conservador de Bienes Raíces de Los Lagos, inscripción que asimismo debe ser cancelada.

4- Que las partes sean restituidas al estado anterior a contratar, recuperando su vigencia, en todas sus partes, la inscripción de dominio de don Luciano Castillo Chicao, sobre la HIJUELA NUMERO CUARENTA y CUATRO, resultante de la Reserva Indígena encabezada por don Victoriano Pitripán, ubicada en Huequecura, comuna de Lago Ranco, hoy comuna de Futrono.

5- Que los demandados sean condenados al pago de las costas de la causa.-

A folio 30 con fecha primero de julio de 2018, tiene lugar comparendo de estilo, contestándose la demanda mediante minuta escrita que rola a folio 28, solicitando que se rechace la demanda en todas sus partes, con expresa condenación en costas.

A folio 30 se recibe la causa a prueba, rindiéndose la que obra en autos.

A folio 82 rola informe emitido por la CONADI, complementado a folio 111.-

A folio 115 se citó a las partes para oír sentencia.

CONSIDERANDO:

PRIMERO: Que a folio 1 comparece don Luciano Anselmo Castillo Quelupan, quien deduce demanda en procedimiento especial indígena en contra de don Francisco Padros Marras, de doña Nuria Padros Marras y de don Pau Padros marras, por sí, y además en su calidad de herederos de su padre don Antonio Padros Bigas, solicitando declarar la nulidad absoluta de la compraventa otorgado por escritura pública de compraventa en la Notaria de Rio Bueno, de fecha 13 de junio de 1990, repertorio 449, suscrito entre don Luciano Castillo Chicao, autorizado por su cónyuge doña Orfelina Quelupan Pitripan, por el cual, venden, ceden y transfieren a don Antonio Padros Bigas, quien compra, acepta y adquiere para sí, la propiedad denominada Hijueta número cuarenta y cuatro, resultante de la Reserva Indígena encabezada por don Victoriano Pitripan, ubicada en Huequecura, comuna de Lago Ranco, hoy comuna de Futrono, de una cabida de cuarenta y seis coma cero cero hectáreas, y los siguientes deslindes especiales: NORTE, cercos, camino público y antiguo cauce del río Caunahue,



separando de terreno de la sucesión José Barrientos; ORIENTE, el arenal de la desembocadura del río Caunahue en el Lago Ranco; SUR-PONIENTE y PONIENTE, cercos quebrados separando de la hijuela cuarenta y siete de Santiago Arias Soto; SUR, el Lago Ranco, y cuyo título de dominio se encontraba inscrito a nombre de don Luciano Castillo Chicao a fojas 477, número 448, del registro de propiedad del Conservador de Bienes Raíces de Río Bueno, correspondiente al año 1980, así como la nulidad de las inscripciones y escrituras públicas que indica, con costas.

Funda su demanda en su calidad de hijo y heredero intestado de sus padres don Luciano Castillo Chicao y doña Orfelina Quelupan Pitripan, quienes también tenían calidad indígena de la Etnia Mapuche. Indica que su padre era propietario de la Hijuela número cuarenta y cuatro, resultante de la Reserva Indígena encabezada por don Victoriano Pitripán, ubicada en Huequecura, comuna de Lago Ranco, hoy comuna de Futrono, de una cabida de 46,00 hectáreas con los deslindes especiales que indica.

Añade que dentro de dicha hijuela quedan encerradas las hijuelas cuarenta y seis y cuarenta y cinco, de Jermain González y de Isidro Humberto Castillo Silva, a las que se accede por un camino público.

Manifiesta que adquirió el dominio de la propiedad estando casado bajo régimen de sociedad conyugal con su cónyuge doña Orfelina Quelupan Pitripan, mediante adjudicación del Juzgado de Letras de Mayor Cuantía de Río Bueno. Así consta de la resolución que en copia autorizada se agregó al final del registro de Agregadas de Propiedad del Conservador de Bienes Raíces de Río Bueno, con el Numero 76, junto con el Plano y Proyecto de Hijuelación que forman parte integrante de la misma.

Refiere que el título de dominio a nombre de su padre se inscribió a fojas 477, número 448, del registro de propiedad del Conservador de Bienes raíces de Río Bueno, correspondiente al año 1980.- De la misma inscripción se deja constancia que el inmueble corresponde a una Reserva Indígena, que se divide, y que estaba amparada por el título de Merced dos mil cuatrocientos treinta y ocho, de fecha 08 de mayo de 1913, inscrita a fojas 117, bajo el número 2.423, en el Tomo séptimo, del registro Conservador de la propiedad Indígena en Temuco.



Narra que la referida hijuela quedó afecta a la limitación de indivisibilidad, aún en caso de sucesión por causa de muerte y no poder ser gravada ni enajenada, durante 20 años. Se procedió a su inscripción de acuerdo a los artículos 20 y 22 de la ley 17.729 (ley Indígena) y lo ordenado por el Tribunal de Rio Bueno.

Expresa que la propiedad antes individualizada tiene la condición de Tierra Indígena, según los artículos 1 y 2 de la Ley 17.729, que establece normas sobre indígenas y tierras indígenas y artículo 12 de la Ley 19.253, y sus propietarios y herederos ostentan la calidad de indígenas de la etnia mapuche, de conformidad a lo dispuesto en la Ley 17.729.-

Sostiene que por escritura pública de compraventa otorgada en la Notaria de Rio Bueno, de fecha 13 de junio de 1990, repertorio 449, su padre y su madre, quien también comparece autorizando la venta, venden, ceden y transfieren a don Antonio Padros Bigas, quien compra, acepta y adquiere para sí, la propiedad indígena denominada Hijuela Numero Cuarenta y Cuatro, resultante de la Reserva Indígena encabezada por don Victoriano Pitripán, ubicada en Huequecura, comuna de Lago Ranco, hoy comuna de Futrono, de una cabida de cuarenta y seis coma cero cero hectáreas, con los deslindes especiales que indica. El título de dominio se encontraba inscrito como tierra indígena a fojas 477, número 448, del registro de propiedad del Conservador de Bienes Raíces de Rio Bueno, correspondiente al año 1980.-

Expone que en la cláusula primera de la referida escritura pública de compraventa, se deja constancia en forma expresa que la propiedad que se vende, es tierra indígena de conformidad a lo dispuesto por la ley 17.729, el Decreto Fuerza de Ley 2568 de 1979 y sus modificaciones. Inscribiéndose la propiedad a nombre del comprador a fojas 170 vuelta, número 326, del registro de propiedad del Conservador de Bienes Raíces de Rio Bueno, correspondiente al año 1990.

Relata que de conformidad a lo dispuesto en el artículo 22 de la Ley sobre el Efecto Retroactivo de las Leyes, aplicable en la especie: “en todo contrato se entenderán incorporadas las leyes vigentes al tiempo de su celebración”. De esa manera, a la fecha de celebración de éste contrato estaba vigente la ley 17.729, modificada por el decreto



con Fuerza de Ley 2568 de 1979, la cual resulta plenamente aplicable en la especie. Lo anterior guarda relación con lo dispuesto en el artículo 1 de la misma que dispone que: Los conflictos que resultaren de la aplicación de leyes dictadas en diversas épocas se decidirán con arreglo a las disposiciones de la presente Ley.

Explica que la Ley 17.729 en su artículo 6 señalaba que sólo de conformidad a las disposiciones de esa Ley los indígenas podrán enajenar las tierras indígenas, siendo la regla general que tales tierras no pueden ser enajenadas.

Así los artículos 7 y 8 de la misma ley, señalaban, como excepción, a quienes y bajo qué condiciones podían los indígenas realizar tales actos jurídicos, limitándose a gravarlos al Banco del Estado o instituciones estatales como la CORA, CORFO, INDAP, o instituciones en que el Estado tenga aporte mayoritario de capital. También se permitía enajenación para fines educacionales, religiosos, deportivos o sociales, no siendo ninguno de ellos el caso sub lite.

La enajenación o gravamen de tierras sólo se permitía a otro indígena. Mientras que el artículo 11 señalaba que los Notarios y Conservadores de Bienes Raíces no autorizaran escrituras, actos o contratos que puedan privar a los indígenas del dominio, posesión o tenencia de las tierras indígenas. Por último, el artículo 12 de la ley 17.729 expresa que los actos y contratos celebrados en contravención a las disposiciones de este párrafo adolecen de nulidad absoluta.

Indica que de acuerdo al artículo 12 de la ley 17.729, la nulidad será imprescriptible y podrá ser deducido por todo el que tenga interés en ello y por el Instituto de Desarrollo Indígena.

Añade que la ley indígena, previendo que los afectados por los contratos viciados de nulidad serían los indígenas, y para evitar que sean defraudados, no estableció como excepción la prevista en el Código Civil que impide accionar de nulidad al contratante que ha ejecutado el acto o celebrado el contrato sabiendo o debiendo saber el vicio que lo invalidaba, pues, precisamente la ley presume que los indígenas no sabían o no conocían las leyes, y es por ello, que estableció expresamente que la nulidad absoluta,



además de imprescriptible, puede ser alegada por todo aquel que tenga interés en ello, sin la limitación de la legislación común.

Manifiesta que el referido contrato compraventa es nulo de nulidad absoluta, por las siguientes razones: a) De acuerdo a la ley vigente a la época de su celebración, Ley indígena 17.729, modificada por el arto 26 del DFL 2568 de 1979, las hijuelas cuyo dominio se haya inscrito de acuerdo a las prescripciones de la presente ley: Serán indivisibles aun en caso de sucesión por causa de muerte; tampoco podrán enajenarse por un plazo de 20 años partir de la fecha de su inscripción en el registro de propiedad del Conservador de Bienes Raíces, salvo con autorización expresa del correspondiente Director Regional del Instituto de Desarrollo Agropecuario, la que deberá insertarse en el instrumento que dé cuenta de la enajenación, como asimismo en la inscripción correspondiente.

b) No se dio cumplimiento a la ley Indígena, pues en la inscripción de la compraventa correspondiente practicada a favor de Antonio Padros Bigas, a fojas 170 vuelta, número 326, de 18 de julio del año 1990, del registro de propiedad del Conservador de Bienes Raíces de Rio Bueno, pues, no se insertó, la autorización expresa del Director Regional del Instituto de desarrollo Agropecuario.

c) Por otra parte, no se solicitó, ni se obtuvo, tampoco se insertó en parte alguna, autorización del Director Regional del Instituto de desarrollo Agropecuario para que doña Orfelina Quelupan Pitripan, cónyuge de don Luciano Castillo Chicao, quien también compareció en la compraventa, y dueña de la mitad de los bienes, de conformidad a lo dispuesto en el artículo 3 inciso final de la ley 17.729, pudiera enajenar sus derechos o autorizar la venta de este bien que constituía tierra indígena y que pertenecía a la sociedad conyugal habida con su cónyuge, vicio que provoca la nulidad absoluta, tanto de la compraventa como de sus inscripciones posteriores. Cabe precisar que según disposición de la ley indígena, los actos y contratos celebrados en contravención a la Ley Indígena, adolecen de Nulidad Absoluta.

Refiere que para tratar de encubrir esta venta viciada, se obtiene una autorización del Director Regional del Instituto de Desarrollo Agropecuario, que autoriza



para subrogar este tierra indígena de don Luciano Castillo Chicao, ubicado a las orillas del Lago Ranco, de 46,00 hectáreas con alta plusvalía, que posee más de 1000 metros de orillas al Lago Ranco, por otra tierra que no sólo ser inferior en cabida o superficie, que tiene 33,22 hectáreas, sino que además está ubicada en el sector El Lloly y Santa Laura, de Futrono, terrenos, terrenos del tipo hualve y ñadis, cuyo valor por hectárea es al menos veinte veces menor que el valor del terreno que por ésta venta nula aparece enajenando don Luciano Castillo Chicao.

Narra que no se trata en este caso de una permuta, pues, el Sr. Padros para permutar debía ser dueño de un terreno de un valor similar, por el contrario, se trianguló una figura, donde el sr. Padros compró la tierra indígena, y a cambio se le entregaba dinero para adquirir por subrogación un terreno de menor superficie y de menor valor, ubicado en El Lloly Santa Laura, de 33,22 hectáreas, y que se encontraba inscrito a nombre de un tercero, don Elías Jaramillo Reyes, a fojas 281 vuelta, número 425, del año del registro de propiedad del Conservador de Bienes Raíces de La Unión, del año 1988, perjudicando directamente a sus padres.

Expresa que tan pronto don Antonio Padros Bigas obtuvo la inscripción de la compraventa a su nombre en el Conservador de Bienes Raíces de Rio Bueno, procedió a trasladar esta inscripción viciada, desde el Conservador de Bienes Raíces de Rio Bueno, al Conservador de Bienes Raíces de Los Lagos. Así la inscripción viciada de fojas 170, número 326, de 1990, del registro de propiedad del Conservador de Bienes Raíces de Rio Bueno, a nombre de don Antonio Padros Bigas, es trasladada a fojas 889, número 982, del año 1992, al registro de propiedad del Conservador de Bienes Raíces de Los Lagos, por pertenecer a ésta jurisdicción el bien raíz enajenado.

Una vez obtenido el traslado de la inscripción desde Rio Bueno a Los Lagos, transfiere el inmueble a favor de sus hijos, quienes son los demandados en estos autos- .

Relata que Antonio Padros Bigas, procede a transferir el a sus hijos don Pau Padros Marras, don Francisco Padros Marras y doña Nuria Padros Marras, en un 30%, un 50% y un 20% respectivamente, mediante escritura pública de compraventa otorgada en la Trigésimo Cuarta Notaria de Santiago de don Miguel Garay Figueroa, de 30 de



noviembre de 1992. Inscribiéndose a su favor a fojas 890, número 983 del año 1990 del Conservador de Bienes Raíces de Los Lagos. Adiciona que nuevamente se incurre en los vicios de nulidad absoluta de la compraventa e inscripción de ésta tierra indígena, pues, no se obtuvieron las autorizaciones legales para transferir esta tierra indígena, no se insertó la autorización en la escritura y en la inscripción, y la venta de tierras indígenas estaba prohibida por la ley vigente a la época de celebración de este contrato.

Indica que una a vez practicada la inscripción, don Pau Padros Marras procede a transferirle sus derechos a don Francisco Padros Marras, mediante escritura pública de fecha 27 de noviembre de 1995, otorgada ante el Notario de Santiago don Gonzalo de la Cuadra Fabres, titular de la Trigésima Octava Notaría de Santiago, quedando inscritos estos derechos a fojas 726 Numero 798, del año 1995 del registro de propiedad del Conservador de Bienes Raíces de Los Lagos.

Añade que a su vez, doña Nuria Padros Marras, procede a transferirle sus derechos a don Francisco Padros Marras, mediante escritura pública de fecha 27 de noviembre de 1995, otorgada ante el Notario de Santiago don Gonzalo de la Cuadra Fabres, titular de la Trigésima Octava Notaría de Santiago, quedando inscritos estos derechos a fojas 727 Numero 799, del año 1995 del registro de propiedad del Conservador de Bienes Raíces de Los Lagos.

Manifiesta que en la actualidad don Francisco Padros Marras, se mantiene como el único titular inscrito del total del dominio de la referida propiedad.

Refiere que de conformidad a lo dispuesto en los artículos 1689 y ss. del Código Civil La nulidad judicialmente pronunciada da acción reivindicatoria contra terceros poseedores.

Narra que don Antonio Padros Bigas, fallece el año 1999, quedando inscrita su defunción en la circunscripción Vitacura, numero 230 y su posesión efectiva es concedida a sus hijos antes mencionados don Pau, don Francisco y doña Nuria Padros Marras, mediante resolución judicial del 18 Juzgado Civil de Santiago, quienes son los continuadores legales de su padre fallecido.



En lo que atañe a la competencia del tribunal, de conformidad a lo dispuesto en el artículo 56 de la Ley 19.253, la competencia se radica en el Juez de Letras competente de la comuna donde se encontrare situado el inmueble, siendo en el caso de autos la comuna de Futrono.

En cuanto al derecho cita las leyes N° 17.729 y N° 19.253; el artículo 10, 1466, 1682, 1683y 1687 del Código Civil, Ley sobre el efecto retroactivo de las leyes y Convenio 169 de la OIT.

SEGUNDO: Que a folio 28 consta minuta escrita de contestación solicitando que se rechace en todas sus partes, con expresa condenación en costas por cuanto carece de todo fundamento tanto en los hechos como en el derecho.

Indica que las argumentaciones del actor son absolutamente infundadas y, por lo mismo temerarias, al contravenir normas legales expresas; el actor falsea las normas legales aplicables invocando normas legales derogadas a la época en que el contrato cuya invalidación se reclama, fue celebrado.

Añade que contestada la demanda con rigor y exactitud jurídica deberá concluirse que la acción ejercida en este juicio constituye una extraña escaramuza o una torpe maniobra para alentar falsamente expectativas no sólo desmedidas sino que absolutamente erróneas, improcedentes e infundadas. Así las peticiones que formula se contradicen con sus propias aseveraciones vertidas en la misma demanda.

Niega categóricamente la afirmación del actor en cuanto sostiene que la compraventa supuestamente se encontraba prohibida, fundando su aseveración en los artículos 6 y 7 de la Ley N° 17.729 al tiempo de su celebración.

Manifiesta que el demandante ignora las modificaciones que fueron introducidas al primitivo texto de la Ley N° 17.729. En virtud de esas modificaciones puede señalarse que existe un texto original y uno modificada de la Ley N° 17.729.

a) El texto original de la Ley N° 17.729, entró en vigencia el 26 de septiembre del año 1972;

b) Dicha ley fue modificada por el Decreto Ley N° 2.568 de 28 de marzo de 1979, cuyo artículo 1, dispuso expresamente que “sustitúyase el Título I de la ley



número 17.729, por el siguiente: Título I de los Indígenas, de las Tierras Indígenas, de la división de las Reservas y de la liquidación de las Comunidades Indígenas”, derogando parcialmente el texto primitivo.

En virtud de esa derogación de las primitivas disposiciones de la Ley N° 17.729, se sustituyó íntegramente su Título I. El contrato de compraventa en cuya virtud don Luciano Castillo Chicao vendió, cedió y transfirió la Hija 44 resultante de la división de la Reserva Indígena encabezada por don Victoriano Pitripán, ubicado en Huequecura, comuna de Lago Ranco, hoy comuna de Futrono, provincia de Valdivia, (en ese momento) Décima Región de Los Lagos, a don Antonio Padros Bigas, fue celebrado por escritura pública de fecha 13 de junio de 1990, Repertorio N° 449-1990, en la Notaría de Río Bueno de Cristian Sanhueza Pimentel.

Por lo que, a la fecha de la celebración del contrato de compraventa cuya nulidad se demanda, regía la Ley N° 17.729 modificada por el Decreto Ley N° 2.568 de 28 de marzo de 1979.

Refiere que de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 22 de la Ley sin número, sobre Efecto Retroactivo de la ley, publicada con fecha 07 de octubre de 1861, “en todo contrato se entenderán incorporadas las leyes vigentes al tiempo de su celebración”. Habiendo sido celebrado el contrato de compraventa entre don Antonio Padros Bigas y don Luciano Castillo Chicao, por escritura pública otorgada con fecha 13 de junio de 1990, resultan aplicables a ese contrato las disposiciones de la Ley N° 17.729 modificada por el Decreto Ley N° 2.568 de 28 de marzo de 1979, las que de acuerdo a las disposiciones de la Ley sin número, sobre Efecto Retroactivo de la ley, se entienden incorporadas en el contrato celebrado.

Narra que más allá de concepciones ideológicas que existen en la materia, es preciso tener en consideración que la modificación de la Ley N° 17.729 en virtud del Decreto Ley N° 2.568 de 28 de marzo de 1979, tuvo por objeto sustituir el régimen especial de los indígenas y de sus tierras, integrándolos al régimen común del derecho nacional, en términos tales que entre 1979 y 1990 alrededor de 2.000 comunidades mapuche fueron divididas, dando origen a alrededor de 72 mil hijuelas individuales,



quedando las tierras indígenas sometidas a la ley de la oferta y la demanda y al libre juego del mercado, sin protección legal, lo que permitió su traspaso a manos no indígenas, mediante actos que se ajustaban plenamente a las disposiciones legales aplicables.

Sostiene que son establecidas inequívocamente las disposiciones legales vigentes al tiempo de la celebración del contrato, esto es, la Ley N° 17.729 modificada por el Decreto Ley N° 2.568 de 28 de marzo de 1979, que sustituyó íntegramente su Título I, su examen conduce a concluir que el contrato celebrado es plenamente válido; y si existiera algún defecto en su otorgamiento, la acción para reclamar de ese supuesto defecto se encuentra irremediablemente prescrita.

Expresa que el artículo 1 en su inciso final de la Ley N° 17.729 modificada por el Decreto Ley N° 2.568 de 28 de marzo de 1979, estableció expresamente que “a partir de la fecha de su inscripción en el Registro de Propiedad del Conservador de Bienes Raíces, las hijuelas resultantes de la división de las reservas, dejarán de considerarse tierras indígenas, e indígenas a sus dueños o adjudicatarios”.

Expone que el demandante confiesa en su demanda, que su padre, don Luciano Castillo Chicao, adquirió el dominio de la Hijuela N° 44 inscribiéndose el título a nombre de su padre a fojas 477 N° 448 del Registro de Propiedad del año 1980 del Conservador de Bienes Raíces de Río Bueno y “que el inmueble corresponde a una Reserva Indígena, que se divide...” En consecuencia, de acuerdo a la regla citada, desde que se produjo la inscripción del inmueble a nombre del padre del demandante, legalmente la Hijuela N° 44 resultante de la división de la Reserva Indígena encabezada por don Victoriano Pitripán, ubicado en Huequecura, comuna de Lago Ranco, hoy comuna de Futrono, provincia de Valdivia, (en ese momento) Décima Región de Los Lagos, dejó de considerarse como tierra indígena y su adjudicatario dejó de ser considerado indígena.

Relata que de dicha consideración resulta que no puede reputarse indígena al dueño y no pudiendo la tierra ser calificada de indígena, no es posible aplicar el estatuto especial de las Leyes N° 17.729 ni la actual Ley N° 19.253. Y es por ellos que



sostenemos que la compraventa fue plenamente válida lo que hace que la acción de nulidad intentada en este juicio deba ser rechazada.

Indica que en el mismo sentido reitera esa aseveración el inciso final del artículo 7 en cuanto expresamente dispone que “terminado el procedimiento de división de la reserva e inscritas las hijuelas resultantes de la misma en el Registro de Propiedad del Conservador de Bienes Raíces, se estará a lo dispuesto en el artículo 26, esto es, quedan sometidas a cargas diferentes de la in-comercialidad que el demandante pretende.

Manifiesta que en coherencia y armonía con lo que se viene sosteniendo el artículo 26 de la Ley N° 17.729 modificada por el Decreto Ley N° 2.568 de 28 de marzo de 1979, dispuso que las hijuelas cuyo dominio se hubiere inscrito conforme a las disposiciones de esta ley serán indivisibles aun en el caso de sucesión por causa de muerte, estando obligados los Conservadores a inscribir de oficio esta prohibición.

Se establece además, que las parcelas resultantes de procesos de subdivisión no podrán enajenarse durante 20 años a partir de la fecha de su inscripción en el Registro de Propiedad del Conservador de Bienes Raíces, a menos que dichas enajenaciones sean autorizadas por el correspondiente Director Regional del Instituto de Desarrollo Agropecuario; en tal caso la autorización debía insertarse en el instrumento que dé cuenta de la enajenación, como asimismo en la inscripción correspondiente.

Sin embargo, la autorización solamente podía ser concedida por el Director Regional de INDAP en dos casos: a) Cuando el adquirente sea dueño de otra hijuela resultante de alguna división de tierra practicada de acuerdo con esta ley;

b) Cuando la enajenación tenga por objeto subrogar otro inmueble a la hijuela que se proyecta enajenar y en los instrumentos de permuta o de compra y de venta, en su caso, se exprese el ánimo de subrogar;

c) Para fines sociales o educacionales.

En los casos de las letras a) y b) la prohibición afectará a la hijuela enajenada o a la que se adquiriera, en su caso, durante todo el tiempo que falte para completar el plazo de veinte años antes señalado.



Refiere que entonces que el estatuto que regía las tierras provenientes de divisiones de reservas indígenas, autorizaba su enajenación cuando tuviere por objeto subrogar otro inmueble a la hijuela que se proyecta enajenar y en los instrumentos de permuta o de compra y de venta, en su caso, se exprese el ánimo de subrogar.

En suma, podían enajenarse válidamente las hijuelas resultantes de la subdivisión cuando esa enajenación tenía por objeto subrogar otro inmueble a la hijuela que se proyectaba enajenar, y que el ánimo de subrogar constara en el instrumento de permuta o de compraventa.

Narra que en el caso de estos autos, el ánimo de subrogar se expresó en la cláusula primera letra b de la escritura pública de compraventa celebrada entre don Luciano Castillo Chicao, don Antonio Padros Bigas y don Elías Jaramillo Reyes, señalando explícitamente señala, b) que según dispone el artículo veintiséis del citado Decreto Fuerza de Ley dos mil quinientos sesenta y ocho, la enajenación de la propiedad del señor Castillo, es posible si tiene por objeto subrogar otro inmueble a la hijuela que vende, y ello solo con la autorización expresa del Director Regional del Instituto de Desarrollo Agropecuario, autorización que íntegramente se inserta en la presente escritura. En mérito de estas consideraciones, don Luciano Castillo procede a vender a don Antonio Padros una propiedad de su dominio con la expresa intención y voluntad de todos los comparecientes, en cuanto fuere en el derecho necesario y procedente de ser la propiedad que vende subrogada por la que compra a don Elías Jaramillo, todo ello según consta en las clausulas siguientes.

En consecuencia, la tesis del actor en cuanto sostiene que la compraventa no sería válida por encontrarse ésta prohibida por ley, debe ser rechazada por dos órdenes de razones:

1.- Porque el demandante hace aplicable al contrato una prohibición que no se encontraba vigente en la ley al tiempo de la celebración del contrato;

2.- Porque el contrato celebrado entre el padre del demandante, don Luciano Castillo Chicao, a don Antonio Padros Bigas, cumplió a cabalidad con el requisito exigido por el artículo 26 de la ley para que la compraventa fuere válida, esto es, “que la



enajenación tuviere por objeto subrogar otro inmueble a la hijuela que se proyecta enajenar” y se manifestó en forma expresa en la respectiva escritura el ánimo de subrogar el predio indígena por otro, en la escritura de compraventa.

Expresa que las aseveraciones del actor en el escrito de demanda, deben ser reputadas su confesión, motivo por el cual deben producir plena prueba, por lo demás, se acreditará en el proceso, que efectivamente la subrogación se produjo y que el padre del demandante quedó dueño de otro terreno en virtud de la subrogación que se produjo, debidamente autorizada por la autoridad que, de acuerdo a la ley, deba intervenir y autorizar esa negociación.

Lo anterior tiene sentido en este capítulo ya que el demandante ha expresado que fundamenta su acción de nulidad, en la circunstancia que la Ley N° 17.729 prohibía expresamente la enajenación de tierras indígenas. Esa aseveración deja manifiesta que el demandante intenta provocar la confusión del Tribunal y de esta parte, ya que las disposiciones legales que cita e invoca en su demanda corresponden a un texto legal que no se encontraba vigente a la época de la celebración del contrato, ya que Ley N° 17.729 modificada por el Decreto Ley N° 2.568 de 28 de marzo de 1979, en forma expresa estableció la posibilidad de enajenar las tierras indígenas mediando subrogación y autorización del Director de INDAP fue establecida en las disposiciones de la.

Relata que se ha pedido que se cancelen todas las escrituras, inscripciones o sub-inscripciones a que haya dado lugar el contrato cuya invalidación ha demandado, en especial aquellas derivadas de la compraventa realizada entre don Antonio Padros Bigas y sus hijos, don Pau Padros Marras, doña Nuria Padros Marras, y don Francisco Padros Marras en un orden de 30%, 20% Y 50% respectivamente; y la posterior compraventa que deja a don Francisco Padros Marras como dueño de un 100% del inmueble en comento.

Justifica su pretensión en la falta de autorización legal para la transferencia de la tierra indígena, esto es, la autorización expresa del Director Regional del Instituto de Desarrollo Agropecuario para la enajenación. Sin embargo, la autorización del Director



Regional del Instituto de Desarrollo Agropecuario no constituía un requisito necesario para que se realizaran las sucesivas enajenaciones.

La autorización del Director Regional del Instituto de Desarrollo Agropecuario no constituye un requisito que tenga fuente legal, para ninguna de las transferencias posteriores a la compraventa celebrada entre don Antonio Padros Bigas y don Luciano Castillo Chicao, ya que para que esta compraventa pudiera ser celebrada se dictó por el Director Regional de INDAP la Resolución Exenta N° 339 de 17 de abril de 1990, que en su parte final expresa: “Alzase la prohibición de gravar y enajenar que el afecta a la hijuela N° 44 de la Ex-Comunidad indígena encabezada por Victoriano Pitripán, por haberse autorizado la enajenación por subrogación a otro inmueble; prohibición que en lo sucesivo afectará al bien raíz que adquirirá don Luciano Castillo Chica o de acuerdo a lo autorizado precedentemente, por todo el término que falte para completar el plazo legal hasta su extinción.

Indica que el alzamiento de la prohibición de gravar y enajenar el inmueble en disputa lo convierte en un inmueble desafectado de las prohibiciones de la ley indígena, sobre el cual el dueño puede realizar cualquier acto de uso, goce y disposición que desee, conforme a las normas generales vigentes de nuestro ordenamiento. En consecuencia, no es necesaria la autorización del Director Regional del Instituto de Desarrollo Agropecuario, puesto que el predio dejó de ser un inmueble indígena luego de la Resolución Exenta N° 339.

Manifiesta que la ley vigente al tiempo del contrato no hace ninguna mención a la supuesta imprescriptibilidad de la acción de nulidad. El demandante interpone acción de nulidad transcurridos casi 28 años desde la fecha de celebración del contrato, fundando su precaria pretensión en el artículo 12 del texto primitivo de la Ley N° 17.729; efectivamente esa disposición prescribía que todo acto en contravención a las disposiciones de esa ley eran nulos; y la acción de nulidad era imprescriptible.

Sin embargo, y como fue expuesto anteriormente, el texto primitivo del Título I de la Ley N° 17.729, fue modificado por el Decreto Ley N° 2.568 de 28 de marzo de



1979, que derogó implícitamente dicha norma, ya que en ninguna parte de la ley reformada se vuelve a mencionar la imprescriptibilidad de la acción.

En consecuencia, a la fecha de la celebración del contrato cuya invalidación se reclama en este juicio, celebrado el 13 de junio de 1990, no existía disposición alguna que estableciera la sanción de nulidad en los términos imperativos que prescribía la antigua ley; en consecuencia, la sanción por alguna contravención no es la nulidad absoluta y en los casos que esa sanción es prescrita, la acción respectiva es prescriptible según las norma del derecho común; así se infiere de lo establecido en el artículo 13 de la Ley N° 19.253, que establece la sanción de nulidad sin hacer mención alguna a su imprescriptibilidad.

Expresa que de lo dispuesto en el primitivo texto de la Ley N° 17.729 y en el citado artículo 13 de la Ley N° 19.253, es ineludible concluir que cuando la ley ha querido establecer la imprescriptibilidad de la acción de nulidad lo ha dispuesto en forma explícita, lo que se justifica en derecho teniendo en consideración que si es una fuerte sanción la de nulidad absoluta, constituye una sanción extrema establecer que esa acción no prescribe, pudiendo interponerse en todo tiempo ya que ese carácter afecta la estabilidad de las relaciones jurídicas en forma casi eterna.

Sostiene que consta de autos rol N° 18.182 del Juzgado de Letras de Río Bueno, sobre Lesión Enorme, caratulados Vargas Tapia, Carlos contra Antonio Padros Bigas y Otros, que con fecha 11 de noviembre de 1992 el demandante de estos autos, don Luciano Anselmo Castillo Quelupan y otros, interpusieron demanda de rescisión de la compraventa por el supuesto defecto de lesión enorme.

En esa demanda el demandante de estos autos, don Luciano Anselmo Castillo Quelupan, entre otros, expuso haber celebrado el contrato. En la referida demanda, los demandantes y entre ellos el señor Luciano Anselmo Castillo Quelupan, expusieron el hecho de haberse celebrado un contrato de compraventa por don Luciano Castillo Chicao, quien vendió, cedió y transfirió a don Antonio Padros Bigas, mediante contrato de compraventa celebrado por escritura pública otorgada con fecha 13 de junio de 1990, en la Notaría de Río Bueno, el inmueble denominado hijuela N° 44 resultante de la



división de la ex Reserva Indígena de Victoriano Pitripán, ubicado en Huequecura, comuna de Lago Ranco, hoy comuna de Futrono, cuya cabida es de 46,00 hectáreas, con los deslindes que se expresan en la demanda.

Los demandantes y entre ellos don Luciano Anselmo Castillo Quelupan, admitieron la validez de la compraventa señalando que la venta la realizó don Luciano Castillo Chicao con la obligación de adquirir con el precio un predio de 33,22 hectáreas, que estableciera la sanción de nulidad en los términos imperativos que prescribía la antigua ley; en consecuencia, la sanción por alguna contravención no es la nulidad absoluta y en los casos que esa sanción es prescrita, la acción respectiva es prescriptible según las norma del derecho común; así se infiere de lo establecido en el artículo 13 de la Ley N° 19.253, que establece la sanción de nulidad sin hacer mención alguna a su imprescriptibilidad.

Consta de autos rol N° 18.182 del Juzgado de Letras de Río Bueno, sobre Lesión Enorme, caratulados Vargas Tapia, Carlos contra Antonio Padros Bigas y Otros, que con fecha 11 de noviembre de 1992 el demandante de estos autos, don Luciano Anselmo Castillo Quelupan y otros, interpusieron demanda de rescisión de la compraventa por el supuesto defecto de lesión enorme.

En la referida demanda, los demandantes y entre ellos el señor Luciano Anselmo Castillo Quelupan, expusieron el hecho de haberse celebrado un contrato de compraventa por don Luciano Castillo Chicao, quien vendió, cedió y transfirió a don Antonio Padros Bigas, mediante contrato de compraventa celebrado por escritura pública otorgada con fecha 13 de junio de 1990, en la Notaría de Río Bueno, el inmueble denominado hijuela N° 44 resultante de la división de la ex Reserva Indígena de Victoriano Pitripán, ubicado en Huequecura, comuna de Lago Ranco, hoy comuna de Futrono, cuya cabida es de 46,00 hectáreas, con los deslindes que se expresan en la demanda.

Los demandantes y entre ellos don Luciano Anselmo Castillo Quelupan, admitieron la validez de la compraventa señalando que la venta la realizó don Luciano Castillo Chicao con la obligación de adquirir con el precio un predio de 33,22 hectáreas,



TERCERO: Que es un hecho indubitado en autos que el día 13 de junio de 1990, se celebró un contrato de compraventa del inmueble denominado Higuera Numero Cuarenta y Cuatro, resultante de la Reserva Indígena encabezada por don Victoriano Pitripán, ubicada en Huequecura, comuna de Lago Ranco (hoy comuna de Futrono) de una cabida de 46 hectáreas, entre don Luciano Castillo Chicao y don Antonio Padros Bigas, propiedad que fue inscrita a fojas 170 vuelta, número 326, del registro de propiedad del Conservador de Bienes Raíces de Rio Bueno, correspondiente al año 1990, trasladada a fojas 889, número 982, del año 1992, al registro de propiedad del Conservador de Bienes Raíces de Los Lagos, correspondiente al año 1992.

CUARTO: Que a fin de acreditar sus pretensiones la actora ha rendido la siguiente prueba: A) **DOCUMENTAL:** 1.- Copia de la inscripción de compraventa de fojas 170 vta, número 326, del año 1990, del Registro de Propiedad del Conservador de Bienes Raíces de Rio Bueno correspondiente al año 1990.

2.- Copia de certificado Numero 0290385, de la Corporación Nacional Indígena –CONADI-, respecto a la calidad de indígena, perteneciente a la etnia mapuche, de don Luciano Castillo Quelupan.

3.- Copia de la inscripción por traslado a fojas 889 número 982 del año 1992 del registro de propiedad del Conservador de Bienes Rices de Los Lagos, correspondiente al año 1992.

4.- Copia de la inscripción de posesión efectiva de Luciano Castillo Chicao a sus herederos, de fojas 22, número 24, del registro de propiedad del Conservador de Bienes Raíces de Los Lagos del año 1993.

5.- Copia de la inscripción de posesión efectiva de doña Orfelina Quelupan Pitripan a sus herederos, de fojas 282, número 439, del registro de propiedad del Conservador de Bienes Raíces de Los Lagos del año 2002.

6.- Copia de inscripción de compraventa de Antonio Padros Bigas, a sus hijos Pau Padros Marras, Francisco Padros Marras y Nuria Padros Marras, de fojas 890, número 983, del año 1992, del registro de propiedad del Conservador de Bienes Raíces de Los Lagos del año 1992.



7.- Copia de inscripción de compraventa de Pau Padros Marras a Francisco Padros Marras, inscrita a fojas 726, número 798, del año 1995, del registro de propiedad del Conservador de Bienes Raíces de Los Lagos correspondiente al año 1995.

8.- Copia de escritura pública de compraventa otorgada en la Notaria de Santiago de don Miguel Garay Figueroa, de fecha 30 de noviembre de 1992, entre don Antonio Padros Bigas y sus hijos Pau Padros Marras, Francisco Padros Marras y Nuria Padros Marras.

9.- Copia de escritura pública de compraventa otorgada en la Notaria de Santiago de don Gonzalo de la Cuadra Fabres, de fecha 27 de noviembre de 1995, entre don Pau Padros Marras, doña Nuria Padros Marras a don Francisco Padros Marras.

10.- Certificado de defunción de Luciano Castillo Chicao.

11.- Inscripción de Adjudicación a favor de don Luciano Castillo Chicao, inscrito a fojas 447, número 448, del año 1980, del registro de propiedad del Conservador de Bienes Raíces de Río Bueno del año 1980.

12.- Copia de escritura pública de compraventa otorgada en la Notaria de Río Bueno, de fecha 13 de junio de 1990, repertorio 449, entre don Luciano Castillo Chicao, su cónyuge doña Orfelina Quelupan Pitripan, a don Antonio Padros Bigas.

13.- Copia de Sentencia dictada por la Excma. Corte Suprema, en los autos Rol 82.459-2016.

14.- Certificado de matrimonio de don Luciano Castillo Chicao con doña Orfelina Quelupan Pitripan.

15.- Copia de posesión efectiva de don Antonio Padros Bigas a sus herederos.

16.- Copia de inscripción de traslado de compraventa de Antonio Padros Bigas a Luciano Castillo Chicao, practicada en el Conservador de Bienes Raíces de Los Lagos, a fojas 889, número 982, del registro de propiedad año 1992.

17.- Copia de inscripción de compraventa de los derechos de doña Nuria Padros Marras a don Francisco Padros Marras, a fojas 727, número 799 del año 1995, del registro de propiedad del Conservador de Bienes Raíces de Los Lagos.



B) TESTIMONIAL: comparecieron a prestar su declaración don Carlos Gonzalo Cárdenas Inostroza y don Luis Patricio Hidalgo Quilapan, quienes debidamente individualizados y juramentados prestaron su declaración que rola a folio 37.-

QUINTO: Que por su parte la demandada rindió las siguientes probanzas:

A) DOCUMENTAL: 1.- Copia de contrato de compraventa suscrito entre don Luciano Castillo Chicao y don Antonio Padros Bigas, con fecha 13 de Julio de 1990 en la notaria Río Bueno ante el notario don Cristian Sanhueza Pimentel.

2.- Copia de Resolución Exenta N° 339 de fecha 17 de Abril de 1990 emitida por don John W. Bohle Cendoya, Director Regional del Instituto de Desarrollo Agropecuario (INDAP) Xa. Región, resolución por medio de la cual se autoriza a don Luciano Castillo Chicao para enajenar el inmueble de su propiedad materia de estos autos.-

B) CAUSA A LA VISTA: Se tiene a la vista causa civil Rol N° 18.182 del Juzgado de Letras de Río Bueno sobre Lesión Enorme caratulados “Vargas Tapia, Carlos contra Antonio Padros Bigas y Otros”. Comparece como demandante don Luciano Castillo Quelupan y otros quienes interpusieron demanda de rescisión por supuesta lesión enorme de la compraventa celebrada entre don Luciano Castillo Chicao y don Antonio Padros Bigas, con fecha 13 de Julio de 1990.

En la que con fecha 5 de enero de 1994 se declaró el abandono del procedimiento. Certificándose con fecha 17 de enero de 1994 que la resolución que dispuso el abandono del procedimiento se encuentra firme y ejecutoriada.

SEXTO: Que a folio 82 y 111, rola el técnico, social y jurídico emitido por la Dirección Regional de la Corporación Indígena de la Región de Los Ríos.

SÉPTIMO: Que de lo prescrito en el artículo 1681 del Código Civil se concluye que la nulidad absoluta es una sanción legal impuesta a los actos celebrados con omisión de un requisito exigido en consideración a la naturaleza o especie, o también cuando ellos han sido ejecutados en contravención a la ley.

De conformidad a lo dispuesto en el artículo 1683 del Código Civil, la nulidad absoluta puede y debe ser declarada de oficio por el Juez, y puede alegarse por todo el



que tenga interés en ella, excepto el que ha ejecutado o celebrado el acto o contrato sabiendo o debiendo saber el vicio que lo invalidaba.

OCTAVO: Que tal como consta en el raciocinio tercero, el 13 de julio de 1990 se celebró un contrato de compraventa respecto del inmueble denominado Hijuela Numero Cuarenta y Cuatro, resultante de la Reserva Indígena encabezada por don Victoriano Pitripán, ubicada en Huequecura, comuna de Lago Ranco (hoy comuna de Futrono) de una cabida de 46 hectáreas, entre don Luciano Castillo Chicao y don Antonio Padros Bigas. La referida propiedad, a la época de la venta, era Tierra Indígena al tenor del artículo 1 de la Ley N° 17.729. Por su parte el vendedor y su cónyuge detentaban la calidad indígena en atención a lo prescrito en el artículo 3 de la misma ley.

NOVENO: Que la ley vigente a la época de la celebración del contrato es la Ley N° 17.729, modificada por el Decreto Ley N° 2.568, de 1979 y por el Decreto Ley N° 2.750, de 1979.

De conformidad al artículo 26 de la ley “Las hijuelas cuyo dominio se haya inscrito de acuerdo a las prescripciones de la presente ley, serán indivisibles aun en el caso de sucesión por causa de muerte. Los Conservadores de Bienes Raíces estarán obligados a inscribir de oficio esta prohibición.

Tampoco podrán enajenarse durante veinte años a partir de la fecha de su inscripción en el Registro de Propiedad del Conservador de Bienes Raíces, salvo con autorización expresa del correspondiente Director Regional del Instituto de Desarrollo Agropecuario, la que deberá insertarse en el instrumento que dé cuenta de la enajenación, como asimismo en la inscripción correspondiente. La mencionada autorización solamente podrá concederse:

- a) Cuando el adquirente sea dueño de otra hijuela resultante de alguna división de tierra practicada de acuerdo con esta ley;
- b) Cuando la enajenación tenga por objeto subrogar otro inmueble a la hijuela que se proyecta enajenar y en los instrumentos de permuta o de compra y de venta, en su caso, se exprese el ánimo de subrogar;
- c) Para fines sociales o educacionales.



En los casos de las letras a) y b) la prohibición afectará a la hijuela enajenada o a la que se adquiriera, en su caso, durante todo el tiempo que falte para completar el plazo de veinte años antes señalado...”

DÉCIMO: Que atento lo expresado en la cláusula primera y novena de la escritura de compraventa de 13 de junio de 1990, queda de manifiesto que la venta se efectúa de conformidad a la letra b) del artículo 26, ya que se contaba con autorización expresa del correspondiente Director Regional del Instituto de Desarrollo Agropecuario, mediante la Resolución exenta N° 339. Sin embargo, no existe dicha referencia en la inscripción de dominio correspondiente.

DÉCIMO PRIMERO: Que la resolución exenta referida autoriza expresamente a don Luciano castillo a enajenar la hijuela N° 44 y que la venta se realiza para adquirir con el precio de ella una propiedad ubicada en el Proyecto de Parcelación el Llolly y Santa Laura, debiendo alzarse la prohibición de gravar y enajenar que afectaba a la hijuela N°44 de la Ex comunidad Indígena encabezada por victoriano Pitripan.

DÉCIMO SEGUNDO: Que el demandante refiere que al omitirse la autorización del correspondiente Director Regional del Instituto de Desarrollo Agropecuario en la inscripción correspondiente, produce la nulidad absoluta de la enajenación, fundando su opinión en los artículos 6, 7 y 12 de la Ley N° 17.729.-

A juicio de este sentenciador ello es errado, en primer lugar el artículo 2 de la citada Ley distingue entre “reserva”, “goces” e “hijuela”. Así expresa que “Goces” son las diferentes porciones de terreno de la reserva ocupadas por una persona que las explota en forma independiente, en provecho y por cuenta propia. Por su parte “hijuela” es la porción de terreno que en la división de la reserva se adjudique a una persona en propiedad individual y exclusiva.

Los artículos 5, 6 y 7 El artículo 6 regula las enajenaciones, arriendo, aparcerías o constitución de gravámenes respecto de los goce no de las hijuelas, por lo que no son aplicables al caso sub lite.

Por otra parte el artículo 12 de la ley N° 17.729.- en su redacción original efectivamente rezaba “Los actos y contratos celebrados en contravención a las



disposiciones de este párrafo adolecen de nulidad absoluta. La acción de nulidad será imprescriptible y podrá ser ejercida por todo el que tenga interés en ello y por el Instituto de Desarrollo Indígena”.

No obstante a la época de la celebración del contrato, el referido artículo había sido modificado por el Decreto Ley N°2568, de fecha 28 de marzo de 1979. Se encontraba inserto dentro del Capítulo II relativo a la división de las reservas y de la liquidación de las comunidades. No existiendo en la Ley post modificación sanción de nulidad por la omisión acusada en la demanda.

DÉCIMO TERCERO: Que el demandante agrega que tampoco se solicitó, ni se obtuvo, que tampoco se insertó en parte alguna, autorización del Director Regional del Instituto de desarrollo Agropecuario para que doña Orfelina Quelupan Pitripan, la cónyuge de don Luciano Castillo Chicao, quien también compareció en la compraventa, y dueña de la mitad de los bienes, de conformidad a lo dispuesto en el artículo 3 inciso final de la ley 17.729, pudiera enajenar sus derechos o autorizar la venta de este bien que constituía tierra indígena y que pertenecía a la sociedad conyugal habida con su cónyuge, vicio que provoca la nulidad absoluta, tanto de la compraventa como de sus inscripciones posteriores.

Al igual que en el punto anterior el artículo 3 en su redacción original refería “Se entenderá que la mitad de los bienes pertenecen al marido y la otra mitad a la mujer, o a todas ellas por iguales partes, cuando fueren varias, a menos que conste que ellos han sido aportados por uno solo de los cónyuges”. Sin embargo dicho artículo fue modificado por el Decreto Ley N° 2.568 y por el Decreto Ley N° 2.750.-

DÉCIMO CUARTO: Que tal como se ha expresado don Luciano Castillo Chicao se encontraba casado con doña Orfelina Quelupan Pitripan, bajo el régimen de sociedad conyugal, ello atendido el certificado de matrimonio acompañado.

Por otra parte la hijuela N° 44 resultante de la división de la Reserva Indígena encabezada por Victoriano Pitripan, fue adquirida por don Luciano Castillo Chicao por adjudicación del Juzgado de Letras de Mayor cuantía de Rio Bueno.



El artículo 19 de la Ley Indígena refiere “...En ella adjudicará a cada ocupante en propiedad individual y exclusiva las correspondientes hijuelas, las que no estarán sujetas a ninguna limitación de superficie...”

En el contrato de venta celebrado, en junio de 1990, consta en la cláusula octava que doña Orfelina Quelupan Pitripan, conyugue del vendedor, otorga su consentimiento para la compraventa y declara conocer los términos de la misma.

A este respecto se estima que dicha comparecencia así como la autorización del Director Regional del Instituto de Desarrollo Agropecuario, mediante la Resolución Exenta N° 339, es suficiente para la validez del contrato, no siendo necesario otra autorización del Director Regional del Instituto de desarrollo Agropecuario para doña Orfelina Quelupan Pitripan, ya que la hijuela se encontraba inscrita a nombre de su conyugue, quien comparece como vendedor y exigiéndose respecto de ella únicamente su comparecencia prestando su consentimiento.

DÉCIMO QUINTO: Que una vez efectuada la enajenación a don Antonio Padros Bigas por subrogación a otro inmueble, debidamente autorizado por la Resolución Exenta N° 339 se alzaron la prohibición de gravar y enajenar que afectaba a la hijuela número Cuarenta y Cuatro, resultante de la Reserva Indígena encabezada por don Victoriano Pitripán, ubicada en Huequecura, comuna de Lago Ranco, hoy comuna de Futrono, de una cabida de cuarenta y seis coma cero cero hectáreas. Afectando dicha prohibición al bien raíz adquirido por don Luciano Castillo Chicao en el Proyecto de Parcelación el Llolly y Santa Laura, por todo el tiempo que falte para completar los 20 años.

DÉCIMO SEXTO: Que el actor refiere que se incurre en los vicios de nulidad absoluta de la compraventa e inscripción de ésta tierra indígena, pues, no se obtuvieron las autorizaciones legales para transferirla por don Antonio Padros Bigas, a sus hijos don Pau Padros Marras, don Francisco Padros Marras, y doña Nuria Padros Marras.

Lo anterior es erróneo ya que una vez adquirida el dominio por Padros Bigas, la tierra pierde la calidad indígena, no siendo necesario la exigencia del artículo 26 de la Ley N° 17.729 para efectos de su transferencia. Dicho requerimiento afecta a la propiedad adquirida por subrogación, tal como se expuso en el raciocinio precedente.



DÉCIMO SÉPTIMO: Que en lo que atañe al Convenio N° 169 Sobre Pueblos Indígenas Y Tribales En Países Independientes De La Organización Internacional Del Trabajo, es necesario precisar que:

1.- El contrato celebrado data del 13 de junio de 1990, bajo el imperio de la Ley N° 17.729, modificada por el Decreto Ley N° 2.568, de 1979 y por el Decreto Ley N° 2.750, de 1979.

2.- Que con fecha 27 de junio de 1989 la Conferencia General de la Organización Internacional del Trabajo, en su Septuagésima Sexta Reunión, adoptó el Convenio N° 169 sobre Pueblos Indígenas y Tribales en Países Independientes.

3.- Que el Convenio N° 169 sobre Pueblos Indígenas y Tribales en Países Independientes fue aprobado por el Congreso Nacional de Chile, según consta en el oficio N° 7.378, de 9 de abril de 2008, de la Honorable Cámara de Diputados.

4.- Que el Tribunal Constitucional, por sentencia de fecha 3 de abril de 2008, declaró que las normas del aludido Convenio N° 169 sometidas a su control, son constitucionales.

5.- Que el instrumento de ratificación de dicho Convenio **se depositó con fecha 15 de septiembre de 2008** ante el Director General de la Organización Internacional del Trabajo y, en consecuencia, de conformidad con el artículo 38, párrafo 3, del referido Convenio N° 169, y entró **en vigencia para Chile el 15 de septiembre de 2009**, esto es 19 años después de celebrado el contrato cuya nulidad absoluta se pretende.

DÉCIMO OCTAVO: Que en atención a lo expuesto en los raciocinios precedentes el contrato celebrado ente don Luciano Castillo Chicao y don Antonio Padros Bigas se ajustó a la normativa vigente a la época de su celebración. El haberse omitido la inserción de la autorización del Director Regional del Instituto de Desarrollo Agropecuario, en la inscripción de dominio de Padro Bigas, no era causal de Nulidad Absoluta e Imprescriptible, en la Ley N° 17.729, modificada por el Decreto Ley N° 2.568, de 1979 y por el Decreto Ley N° 2.750, de 1979.



Sin perjuicio de lo anterior y aun en el caso que la referida omisión fuera causal de Nulidad Absoluta, ella no sería imprescriptible, al no establecerlo expresamente la ley y en consecuencia sería aplicable el artículo 1683 inciso final, prescribiendo en el plazo de 10 años.

DÉCIMO NOVENO: Que lo sostenido precedentemente se encuentra ratificado en virtud de la causa civil Rol N° 18.182, tenuta a la vista. En la referida causa se presenta, por doña Orfelina Quelupan Pitripan y sus hijos, entre ellos don Luciano Anselmo Castillo Quelupan, demanda de rescisión de venta por lesión enorme en contra de don Antonio Padros Bigas y don Elías Jaramillo Reyes.

En el libelo presentado se señala que se cumplió con la normativa vigente, de la acción incoada se desprende que el actor al presentar la referida demanda le reconoce validez al contrato que hoy pretende se declare nulo absolutamente.

Dándosele por este sentenciador a los hechos y alegaciones efectuados en la demanda de rescisión por lesión enorme, el mérito de plena prueba en atención a lo estatuido en el artículo 398 del código de Procedimiento Civil señala "...La confesión extrajudicial...La misma regla se aplicará a la confesión prestada en otro juicio diverso; pero si éste se ha seguido entre las mismas partes que actualmente litigan, podrá dársele el mérito de prueba completa, habiendo motivos poderosos para estimarlo así".

VIGÉSIMO: Que el resto de la prueba rendida en nada altera lo razonado precedentemente.

Y visto lo señalado en los artículos 1681,1683, 1689 y 1749 y siguientes del Código Civil: 144, 254 y 398 del Código de Procedimiento Civil, Ley 17.729, Decreto Ley N° 2.568 y N° 2.750, Ley N° 19.253, artículo 22 de la Ley de Efecto Retroactivo y Convenio N° 169 de la OIT, se declara:

Que se rechaza en todas sus partes, con costas, la demanda presentada a folio 1 presenta por don Luciano Anselmo Castillo Quelupan, en contra de don Francisco Padros Marras, de doña Nuria Padros Marras, y de don Pau Padros Marras, ya individualizados.

Anótese, regístrese, y archívese en su oportunidad.



Notifíquese a la parte demandante vía correo electrónico y a la parte demandada por cédula.

DICTADA POR DOÑA MARIANELA LUNA NEIRA. JUEZ TITULAR.

Se deja constancia que se dio cumplimiento a lo que dispone el inciso final del artículo 162 del Código de Procedimiento Civil. Los Lagos, a veintitrés de diciembre de dos mil veinte.

